



Mandato del presidente Uribe Vélez: ¿Constante deslegitimación contra la labor de defensa de los derechos humanos en Colombia?

Desde el principio de su mandato, el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, ha mantenido una posición en contra de los defensores, líderes sociales, líderes de opinión, ONG internacionales acompañantes y cooperantes. Sus declaraciones públicas han sido el motor para que otros funcionarios de gobierno se comporten en igual o peor forma. Reconociendo que esta directriz de permanente deslegitimación contra la labor de defensa de los derechos humanos, genera un clima de hostilidad que aumenta los riesgos, el *Programa Somos Defensores*, presenta aquí una compilación de las declaraciones de funcionarios públicos divulgadas entre febrero y noviembre de 2008.

FEBRERO

José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, hizo declaraciones en contra de la marcha del 6 de marzo, promovida por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Sostuvo el asesor que ni el presidente ni él participarían en la marcha porque ésta era convocada por las FARC: “Difícilmente la sociedad colombiana participará en tal tipo de convocatoria cuando precisamente estamos marchando contra los que convocan”¹.

El 11 de febrero en el programa ‘Hora 20’ de Caracol Radio, José Obdulio Gaviria, expresó sus razones con otros argumentos:

¹ El gobierno no apoya marcha promovida contra los “paras”. El Espectador, 11 de febrero de 2008. “Asesor presidencial descalifica marcha contra los paramilitares”, El País de Cali, 11 de febrero de 2008. “Gobierno de Uribe rechaza marcha contra los paramilitares”, El informador, 13 de febrero de 2008.

“Desestimulo a mis amigos a que participen en la marcha por la forma como se citó. [...] Manuel Cepeda es una persona vinculada muy estrechamente a la fundación y formación de las FARC y uno de los frentes más sanguinarios de las FARC lleva su nombre. No me pareció que tuviera mucho que ver una marcha contra una forma cualquiera de violencia en Colombia que tuviera ese icono”.

MARZO

Luego de múltiples denuncias nacionales e internacionales por las declaraciones del asesor presidencial, incluida una acción de tutela que presentó el defensor Iván Cepeda Vargas, en la que pedía rectificación, y una carta de 22 organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos en la solicitaban al presidente distanciarse de las declaraciones de su asesor, el 31 de marzo el señor José Obdulio Gaviria respondió:

“Aunque haya entre nosotros discrepancias, nos une la certeza de que tenemos instituciones y autoridades estatales democráticas y legítimas. Sus últimas declaraciones públicas me llevan a pensar que descree, igual que el Gobierno, de la prédica terrorista, según la cual Colombia padece bajo un Estado “ilegítimo, criminal o mafioso”.

La única fuerza que debemos utilizar los ciudadanos es la de los argumentos; toda otra es monopolio del Estado. Antes de 2002, fue común la amenaza y la agresión por razón de ideas o militancia política. Las FARC, el ELN y las AUC perseguían impunemente a los sindicalistas, periodistas, a nosotros los académicos, a los concejales y alcaldes... Intentaron crear una sociedad de pensamiento único y militancia interferida. Hoy, vigente la Seguridad Democrática, esas organizaciones terroristas, fuentes de amenazas y atentados, están muy neutralizadas.

Las FARC acaban de publicar un amenazante panfleto contra académicos antioqueños. Yo encabezo la lista. Como estoy seguro de que usted repudia ese crimen, le ruego iniciar una activa campaña mundial, como usted las sabe hacer, exigiendo respeto a mi integridad y la de mis compañeros. Sé que lo hará por convicción, no por simple gratitud con el Gobierno y las Fuerzas Armadas, tan desveladas por su seguridad y, en general, la de los ilustres militantes de la oposición. En el campo de la democracia nadie es enemigo de nadie. Sólo nos reconocemos como contradictores y émulos.

Exalto su entereza al repudiar el apoyo de las organizaciones terroristas a la marcha del 6 de marzo. Cuente con toda mi solidaridad en la lucha por hacer visibles a las víctimas del terrorismo y para que haya verdad, justicia y reparación”.

Organizaciones Indígenas del Cauca: El 15 de marzo en Popayán, mientras se encontraba en un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe, ofrece recompensas a quienes den información sobre personas que promueven la recuperación de tierras en el departamento.

"¿Hemos pagado alguna recompensa por información sobre invasores?" [...]

"¡Ofrezcámoslas; eso ha sido muy útil en el país. Dicen: "no, es que están allá, están consolidados, que no los rompen". Los rompen. Los delincuentes terminan rotos. A uno le dicen: "no, esa gente es muy unida, se unen para invadir y nadie va a delatar al otro". Mentiras. Los delincuentes terminan acusándose los unos a los otros. [...]"

"Los delincuentes terminan traicionándose, y la recompensa ayuda a que se traicionen. Hay que romperlos con la recompensa, Mi General."

"[...] Las autoridades militares y de Policía quedan esta noche autorizadas para ofrecer recompensas por estos casos y facilitar la judicialización"

MAYO

El presidente no sólo no rectificó a su asesor, sino que atacó nuevamente a sus contradictores:

1. El 3 de mayo de 2008, una carta de la Presidencia de la República colombiana enviada al diario El Espectador, en contra de una columna de opinión de Iván Cepeda en la que se refería a la continuidad del fenómeno paramilitar en la universidad de Córdoba:

"La Presidencia de la República rechaza las informaciones calumniosas del columnista IVAN CEPEDA publicadas hoy, quien posa de víctima de violación de derechos humanos y en la práctica es un hostigador a que se violen los derechos humanos".

2. Declaraciones del presidente Uribe durante la inauguración del Terminal de Transporte de Montería, 6 de mayo de 2008

(...)

“Aquí no se reparó a las víctimas.

Yo le pregunto al señor Gustavo Petro, senador de la Republica; le pregunto a León Valencia, escritor, antiguo integrante del grupo terrorista Corriente de Renovación Socialista del Eln, si ellos han reparado a algunas de las víctimas de Córdoba, si han reparado a algunas de las víctimas de Colombia, si entregaron su riqueza para reparar víctimas.

No pueden contestar. Al contrario, qué vergüenza, el Estado entregó plata a esas organizaciones. A mi Gobierno le correspondió entregarle todavía dinero al M-19, por compromisos de gobiernos anteriores.

¡Qué vergüenza! ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Cómo se han gastado ese dinero? ¿A qué lo han aplicado?

Y les formulo otra pregunta. Colombia quiere saber la verdad de sus delitos. Porque en este Gobierno, con la Ley de Justicia y Paz, se les exige la verdad a los desmovilizados que se someten a ella. Pero en el pasado, cuando se desmovilizaron Gustavo Petro, senador de la Republica, León Valencia y compañía, no se les exigió reparación, tampoco se les exigió verdad.

Que no salgan ahora con chistes, a decir que sus amigos de la política fueron Carlos Franco, José Obdulio Gaviria o Rosemberg Pabón.

Carlos Franco se reinsertó en su momento. Es hoy el Alto Consejero Presidencial para Derechos Humanos. Hace una tarea imparcial y ecuánime.

Rosemberg Pabón se reinsertó. Fue Alcalde de Yumbo, en una tarea que el país aplaudió. Y hoy dirige nuestra organización de economía solidaria, en nuestro Gobierno.

Él y el doctor Bustamante, Presidente de Coldeportes, son los reinsertados que han dicho la verdad. Han dicho: ‘Los crímenes que cometimos son inconfesables’.

Pero el señor Gustavo Petro, senador de la República, y el señor León Valencia, no le han dicho la verdad al país, ni han reparado a las víctimas en región alguna de la Patria.

Vienen a hablar entonces del Doctor José Obdulio Gaviria, que era su amigo, cuando ellos eran guerrilleros. Ojalá esto se aclare. Porque si estos señores, si van a decir mentiras, mejor que se queden callados.

Porque en un tema tan serio como la confesión de la verdad de los cómplices, no se puede jugar a chistes, ni a la ironía. O que digan la verdad o que tengan la valentía de Rosemberg Pabón de decir que esos crímenes son crímenes inconfesables, que esas amistades son amistades inconfesables.

Y también hay que ver por qué muchos colombianos se tuvieron que someter a esas guerrillas, y por qué muchos colombianos se tuvieron que someter al paramilitarismo. Porque no había Estado. Porque la gente estaba desprotegida.

A muchos no les quedaba más camino en unas regiones que someterse a la guerrilla. Y a otros el único camino que les quedaba en otras regiones era someterse al paramilitarismo. Y el Estado ausente.

Ojalá los jueces y magistrados de la República, en los juicios que se adelantan, tengan en cuenta la situación que vivía el país antes de 2002.

Y repito hoy al oído de mis compatriotas, inaugurando esta terminal de transporte de la nueva Montería, que los crímenes que se investigan en su inmensa mayoría fueron anteriores al Gobierno que presido.

La mejor reforma política ha sido la Seguridad Democrática. Porque cuando el Estado da seguridad, entonces se frenan los caminos de penetración de la guerrilla, del paramilitarismo y del narcotráfico a la política y a las instituciones del Estado.

Hay quienes se arropan en la protección de las víctimas

Y permítanme tocar otro tema. Hay personas en Colombia, como el Doctor Iván Cepeda. Ellos se arropan en la protección de las víctimas.

Y la protección de las víctimas les sirve para tener ong's que piden plata en la comunidad internacional.

La protección de las víctimas les sirve para instigar la violación de los derechos humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas. Y nada les pasa.

La protección de las víctimas les sirve para ir al extranjero a desacreditar el Gobierno de Colombia y a desacreditar las instituciones colombianas.

La protección de las víctimas les sirve para decir que Montería es una ciudad criminal, sin que la gente tenga derecho a revirarles.

La protección de las víctimas les sirve para tratar de recuperar, en la Universidad de Córdoba, un antro de delincuencia que hubo en el pasado, y que no vamos a dejar que se restablezca.

La protección de las víctimas les sirve para desacreditar a Colombia.

Para decirles a sus amigos en la comunidad internacional que no se apruebe el TLC, que aquí no se respetan los derechos humanos, cuando mientras nosotros vivimos diariamente buscando que la Seguridad Democrática sea eficaz y transparente, ellos no tienen límites para instigar violación de derechos humanos contra los compatriotas que no comparten su manera de actuar y su manera de descalificar a quienes de ellos disienten.

Entonces veamos ese tema. Estos señores, como Iván Cepeda, tienen derecho a maltratar la honra, a poner en peligro a cualquier colombiano.

Y si a ellos se les llama la atención, si de ellos se discrepa, si ellos son controvertidos, de inmediato salen cobardemente (a decir) que el Gobierno los está poniendo en peligro. Que se tienen que ir para el extranjero. Que van a ir a hablar con unos senadores para que no aprueben el TLC, para que le manden una carta de regaño al Presidente Uribe desde la comunidad internacional.

Pues bien, apreciados compatriotas, esas cosas me toca decir las a mí”.

3. Palabras del Presidente Álvaro Uribe en la Cátedra Colombia, en el marco de la conmemoración del aniversario número 99 de la Escuela Superior de Guerra, Bogotá, 6 de mayo de 2008

(...)

“Pido al señor general Padilla, a los señores viceministros, que me acompañen para poder cumplir, en pocas semanas, el compromiso de hacerles este anuncio de la creación de ese sistema institucional de defensa a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas.

Cómo han cumplido de bien. Cuando nosotros hablamos de este pilar que se llama seguridad desde la democracia, es porque tenemos muchos elementos para comparar.

Recuerden ustedes, cómo, en nombre de la seguridad, se establecieron dictaduras en América Latina. Esas dictaduras no tuvieron preocupación por los derechos humanos. Su tarea contra el terrorismo los llevaba a justificar todas las violaciones de los derechos humanos. Todo lo contrario de Colombia.

Esas dictaduras cercenaban la prensa. Aquí se puede escribir y decir, a través de los medios de comunicación, todo lo que se quiera.

Esas dictaduras expatriaban a los disidentes. En Colombia hoy pueden estar protegidos por las fuerzas y pueden decir todo lo que quieran, justo o injusto, ceñido a la realidad o temerario y calumniante.

Esas dictaduras no permitían que llegaran ONG internacionales a vigilarlas.

Nosotros, en Colombia, hemos enfrentado el mayor desafío terrorista del continente; el más largo, 50 años; el terrorismo más rico, proveniente de la coca; sin justificación, porque en otros países se justificaron como insurgencias que combatían dictaduras. Aquí no han tenido justificación alguna. Aquí lo que ha hecho es maltratar nuestra democracia. Y sin embargo, este es un país abierto a la vigilancia y a la crítica internacional.

El único problema que corre aquí, el único riesgo que enfrenta un vocero de una ONG internacional es que tenga que debatir con el Presidente de la República.

El único riesgo que corre aquí un vocero de una ONG es que el Presidente de la República le diga, como tuvo que decirlo el pasado fin de semana y repetirlo esta mañana: que no se arropen en los derechos de las víctimas, para defender los derechos humanos y, al mismo tiempo, aparecer como instigadores, para que se violen los derechos humanos en perjuicio de las personas cuyas ideas ellos no comparten.

Aquí gozan de plenitud de libertades. Las Fuerzas Armadas de Colombia los protegen. Están gozando del pluralismo. El único derecho que reclamamos frente a ellos es el derecho de poderlos contradecir, es el derecho de decirles que hay que ser genuino en aquello de la protección de las víctimas; que no se pueden utilizar a las víctimas como escudos para atravesarse en contra de la extradición; que no se pueden utilizar a las víctimas como escudos, para que aquellos que se reinsertaron en el pasado sigan tranquilos; que nunca repararon a las víctimas y hoy no tienen el detalle de vergüenza de decir que aunque sea tarde las van a reparar.

El único derecho que reclamamos es el derecho de decirles que acepten el debate interno. Pero cada que se les contradice internamente, inmediatamente salen a decir que los están poniendo en peligro, cuando ellos diariamente sí que ponen en peligro a miles de colombianos e inmediatamente corren al extranjero a hablar con congresistas extranjeros, a poner quejas contra Colombia.

Aquí son muy valerosos para calumniar y cómo son de cobardes cuando salen a poner quejas en el extranjero para tratar de que se maltrate el buen nombre de Colombia, de que se maltrate al Gobierno.

Su excusa de todos los días son las víctimas, los derechos humanos. Desconocen el progreso y todos los días salen al extranjero simplemente a oponerse con mentiras miserables al TLC. A decir: 'allá hay un Presidente paramilitar, allá hay unas Fuerzas Armadas violadoras de derechos humanos. Cómo le van a aprobar a ese país el TLC'.

La cobarde mentira. Porque como no fueron capaces de ganar el debate del TLC con ideas, como los derrotamos demostrando que el TLC es una necesidad para la prosperidad de nuestros compatriotas, entonces, carentes de argumentos, se pegan, artificialmente, del tema de los derechos humanos y de la protección de las víctimas para salir a amenazar, para salir a calumniar, para salir a acusar falazmente, a fin de que a Colombia no se le apruebe el TLC".

4. Palabras del Presidente Uribe durante la instalación del Foro 'Piensa Colombia', Bogotá, 14 de Mayo de 2008

(...)

“Segundo: muchos colombianos tenemos derecho a preguntar, ¿por qué no repararon las víctimas y sí fueron indemnizados por el Estado? No repararon las víctimas y ahora reclaman por las víctimas.

Yo creo que es importante que ya que no repararon pecuniariamente a las víctimas, ni se les exigió, por lo menos las reparen moralmente. Al menos, para que tengan la autoridad de reclamar hoy en favor de la reparación de las víctimas.

Y que digan la verdad de lo que hicieron, porque ahora algunos de ellos son muy celosos en exigir la verdad, pero nunca dieron ejemplo. El país les perdonó todo, sin exigirles que dijeran la verdad.

¿Cuál es el efecto práctico de pedirles esto? Que por lo menos contribuyan a la memoria histórica, para que los colombianos conozcamos -especialmente las nuevas generaciones- todo lo que pasó en el país, esa tragedia que estamos tratando superar y para lo cual no ahorramos riesgos, ni para lo cual no ahorramos decisión que haya que tomar.

Me preocupa sí, que las víctimas -y con eso cierro este capítulo- se dejen engañar de algunos representantes suyos, que se han aliado en la práctica con delincuentes para evitar la extradición.

La extradición es una figura de orden público de la mayor importancia, derivada directamente de la Constitución, y no creo que la noble institución de la tutela se pueda utilizar para afectarla.

Y me parece gravísima esa alianza entre representantes supuestos de las víctimas o representantes reales de las víctimas, en la práctica, que coinciden con sectores ilegales, para estimular por vía de tutela el desmedro de la extradición”.

El 9 de septiembre de 2008, día nacional de los derechos humanos, el Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en un discurso ante los comandantes de las Fuerzas Armadas y medios de comunicación, criticó un supuesto informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que habría publicado la Coordinación Colombia – Europa Estados Unidos. Se debe anotar que para la fecha, el informe no fue público.

“...hay una política deliberada de ciertas organizaciones, que lo que quieren es que se denuncie, porque la cifra va aumentando y va aumentando y es una cifra que se utiliza para después deslegitimar la Fuerza Pública y cuando uno va a averiguar esas denuncias realmente qué significan, no se encuentra nada, encuentra que hay personas interesadas en simplemente inflar cifras como si fuera la realidad.” Discurso del Ministro Santos en su discurso de Clausura del curso sobre DDHH dictado a periodistas de Bogotá en el Club Militar. Septiembre 9 de 2008

OCTUBRE

El 18 de octubre el presidente Álvaro Uribe, durante un discurso público en la población de Quetame acusó de estimular la violencia, a la defensora de derechos humanos alemana y a dos ciudadanos franceses que estaban acompañando la Minga Indígena y que días antes fueron expulsados del país:

“Por Dios. Y miren lo que pasa.

Vinieron unos señores del extranjero, violando el estatuto migratorio colombiano, van y se mezclan con terroristas, y se aprovechan de la protesta indígena. Y ayudan allá a crear problemas de orden público. El DAS los captura y los deporta, como tiene que ser. Entonces se van a decir al extranjero que aquí estamos haciendo una masacre de indígenas.

Esos señores del extranjero debían estar en la cárcel. No los debimos haber deportado, sino que los debimos haber judicializado y haberlos metido a la cárcel, porque ellos son culpables, ellos son culpables de estimular la violencia.

Y se van y le dicen a federaciones internacionales de Derechos Humanos, ‘cuidado que en Colombia están masacrando los indígenas’.

Estos visitantes son criminales y falsos, porque aquí son apologistas del delito y en el extranjero son distorsionantes de la verdad. Eso no se puede permitir.

Entonces dicen: 'que se paren los operativos militares, que se va a masacrar a los paeces'. ¿De donde surge eso? Nosotros lo que estamos es garantizando el orden público.

Esos señores del extranjero hay que pedirle a la Fiscalía, y lo pido informalmente hoy, y le pido a (la Secretaría) Jurídica de Presidencia que tramite la denuncia, que los investigue por participación en actividades violentas, por incitación a la violencia.

Les queda muy cómodo. Vienen aquí a hacer una aventura de terrorismo, incitan a la violencia, y enseguida regresan al extranjero a acusar el país de violador de los derechos humanos.

Entonces que quede muy claro: nosotros tenemos que defender los derechos humanos de los policías y de los soldados.

Eso si no les preocupa a estos visitantes extranjeros. A ellos no les preocupa que tengamos en la Clínica del Valle del Lili, de Cali, al intendente Aldívar Giraldo Galeano, hoy con la amputación de ambas manos, con un trauma ocular, auditivo y en el tórax.

A ellos nos les preocupa que hayamos tenido esta semana 32 policías allá en La María (Cauca), severamente heridos. Eso si no les preocupa.

Nosotros tenemos que defender a nuestros policías, nosotros tenemos que defender a nuestros soldados.

Un país que aspira a vivir sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico, todos los días tiene que apoyar más y querer más y defender más a sus policías y soldados.

Les exigimos a los policías y soldados, los criticamos a toda hora, y no les defendemos sus derechos humanos. Eso es muy injusto. Ese es un tratamiento muy desequilibrado.

Y poner también claridad sobre estos visitantes internacionales que vienen es a incendiar al país con odio y con violencia, y enseguida a acusar al país temerariamente de violación de derechos humanos.

NOVIEMBRE

A propósito del Informe de Human Rights Watch, el 1 de noviembre de 2008, en el Consejo Comunal No. 217 realizado en Enviagado, Antioquia, el presidente Uribe se expresó así sobre el señor Miguel Vivanco:

(...)

“Los derechos humanos

A mí me dicen los asesores de prensa: “no le conteste a Vivanco (José Miguel, director para las Américas de Human Rights Watch), no le conteste a Amnistía Internacional, Presidente no se desgaste”.

Simplemente le quiero decir al señor Vivanco y a los señores de Amnistía Internacional, que ellos no nos tienen que enseñar a nosotros de derechos humanos, ni de convicciones cristianas, ni de convicciones democráticas.

La lucha nuestra ha sido por un concepto democrático de seguridad. Y así se lo propusimos al país en el Manifiesto Democrático antes de nuestra elección.

En el punto 27 de ese Manifiesto se dice: “si ganamos la elección presidencial practicaremos un concepto democrático de seguridad, para proteger a todos los colombianos independientemente de su orientación política, independientemente que sean empresarios o trabajadores”.

Y propusimos unas metas muy serias en protección de líderes sindicales, en protección de periodistas, en protección de maestros. Y hemos hechos todo el esfuerzo a lo largo de estos seis años y 3 meses de Gobierno para cumplirles a los colombianos con ese propósito.

Desde un principio hemos dicho, apreciados compatriotas –y me parece que es por rencor personal que el señor Vivanco no lo reconoce, y que es por ceguera y dogmatismo y fanatismo que Amnistía Internacional no lo reconoce- desde un principio nuestra vocación ha sido una política de Seguridad Democrática con credibilidad de opinión, credibilidad sustentada en la eficacia y en la transparencia.

Hemos dicho que hay dos valores que tienen que sustentar la política de Seguridad Democrática, y lo hemos buscado en todo el país a lo largo de estos años, la eficacia y la transparencia.

La transparencia es adhesión a los derechos humanos, su cumplimiento con todos los protocolos de nuestra Fuerza Pública. La transparencia es eficacia para desmantelar criminales; la transparencia es la protección de la vida de todos los colombianos.

Este es el Gobierno que más ha defendido la Fuerza Pública, este es el Gobierno que más ha apoyado la Fuerza Pública. Yo no recuerdo en mi larga vida política, un periodo de seis años en Colombia de apoyo a la Fuerza Pública en todos los momentos, con tanta determinación.

Más aún, este es el periodo en que la opinión colombiana, el pueblo colombiano – aparte del Gobierno- más ha apoyado a la Fuerza Pública.

A la Fuerza Pública generalmente la suelen acusar –sobretudo esos organismos internacionales- de violación de derechos humanos, pero nadie ha levantado la mano para decir: ‘defiendo los derechos humanos de los soldados y policías’. Este Gobierno lo ha hecho.

Hace pocos días fui a Cali, a decir en una universidad pública, popular, en una universidad de agitación ideológica, de debate intenso, fui a decir: “vengo a defender los derechos humanos de los policías, de los soldados”.

Los policías y los soldados son ciudadanos de carne y hueso como nosotros, y la defensa de sus derechos humanos es tan legítima, tan válida, tan necesaria, como la defensa de los derechos humanos de cualquier otro ciudadano de la Patria.

Fui a defenderlos, a decir: nosotros no podemos hablar de solución de problemas sociales, mientras quienes reclaman esas soluciones sean los responsables de haberle mutilado las dos manos a un intendente de la Policía, de haberlo enviado a la Clínica del Valle del Lili con un trauma craneal, con un trauma ocular.

Respaldo a la Fuerza Pública del Gobierno, respaldo a la Fuerza Pública del pueblo colombiano, y reivindicación de los derechos humanos de los soldados y policías.

Pero lo que no se puede permitir es que haya mentira o violación de derechos humanos.

Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en derechos humanos y que no lo recibimos como tal, que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato.

El señor Vicepresidente de la República ha sido un defensor desde su adolescencia de los derechos humanos, y él ha estado a cargo de la política de derechos humanos desde que empezó este Gobierno.

En este Gobierno ha habido la iniciativa de defender los derechos humanos en todo momento. Este Gobierno en lugar de tapar o de darle la espalda a las quejas de violación de derechos humanos, ha enfrentado los problemas. Yo no he pasado de lado por lo problemas de derechos humanos, sino que los hemos enfrentado.

Este Gobierno fue el primero, cuando se presentó se presentó el caso Guaitarilla, de decir 'hay que comunicar la verdad, no se puede ocultar qué pasó'.

La búsqueda de la verdad ha sido una constante en este Gobierno”.

El 10 de noviembre, en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá, se realizó una reunión entre delegados de Organizaciones No Gubernamentales de derechos Humanos y el gobierno nacional. Además del Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio; el ministro encargado de Defensa, el general Freddy Padilla de León, participaron también delegados de la Armada Nacional; el director de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y la presencia de la embajada de Suecia.

En esta reunión las ONG insistieron en la necesidad de depurar los archivos de inteligencia, un pronunciamiento público del alto gobierno y la creación de una comisión mixta constituida por instituciones del Estado, Gobierno ONG, para hacer seguimiento a las situaciones de riesgo en las regiones. Un día después se conoció la siguiente declaración del Ministerio del Interior.

Declaración del Ministerio del Interior sobre la reunión del Gobierno con organizaciones de derechos humanos

Bogotá, 11 nov (SP). “El Gobierno Nacional y representantes de Organizaciones de Defensores de los Derechos Humanos, con acompañamiento de la comunidad internacional, han tenido un cordial y fructífero encuentro para revisar la situación de quienes se han dedicado a la legítima labor de propender por el respeto a las libertades individuales y colectivas.

El Gobierno y las Organizaciones de Defensores de Derechos Humanos reconocen que tienen diferencias sobre aspectos importantes de la vida nacional, las que deben tramitar dentro de los canales legales y constitucionales, con buen

trato y objetividad.

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe, reitera su voluntad de proteger a todos los ciudadanos, especialmente a las poblaciones vulnerables, como principio universal de respeto y garantías de los derechos humanos.

Es así cómo en los primeros nueve meses del presente año, dentro de otras muchas acciones, ha atendido a 1.510 Defensores de Derechos Humanos amenazados y les ha brindado un esquema de protección con un costo cercano a los 13 mil millones de pesos.

El Gobierno escucha con atención y procederá en consecuencia, para insistir en la promoción de las investigaciones por las amenazas que se hacen en contra de Defensores de Derechos Humanos.

En este sentido, también la Fiscalía General de la Nación, para reforzar sus acciones, anunció que creará en las próximas semanas Unidades Seccionales de Derechos Humanos, dedicadas a investigar amenazas y a capturar a responsables de ataques contra los miembros de esas organizaciones legales.

La Procuraduría General de Nación, por su parte, anuncio que continuará acompañando al Ministerio de Defensa Nacional en la labor de depuración de los informes de inteligencia que tienen organismos de seguridad del Estado, donde son mencionados Defensores de los Derechos Humanos.

El Gobierno Nacional mantendrá y fortalecerá todas las garantías que sean necesarias para que los defensores de derechos humanos y líderes sociales hagan sus denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos.

Las organizaciones representadas en la reunión, anunciaron que entregarán un documento sobre sus peticiones para mejorar las condiciones en que ellas puedan realizar sus labores, ante lo cual el Gobierno las estudiará y dará respuesta.

El Gobierno y las Organizaciones de Defensores de Derechos Humanos, acordaron crear una Comisión bipartita para estudiar una política encaminada a otorgar mayores garantías.

Además, extenderán a las regiones del país, con énfasis en las de mayor vulnerabilidad, este mismo esquema de diálogo y concertación de las autoridades estatales y gubernamentales con los Defensores de los Derechos Humanos.

El Gobierno presentó cifras sobre los resultados de las acciones que viene adelantando en contra de las bandas criminales emergentes que se han

constituido en un nuevo y peligroso factor contra líderes sociales, así como contra funcionarios públicos y ciudadanía en general”.